

preconizados en nuestro ordenamiento jurídico, acordar una retroacción de actuaciones (con el consiguiente retraso) para dar oportunidad a una de las partes a exponer, ante el Tribunal "a quo", unos argumentos que han sido rebatidos de antemano por el mismo, y expuestos extensamente en la presente instancia.

S. de 16-11-1999.

"En el primer motivo de casación, al amparo del art. 95.1, núm. 4 de la Ley de la Jurisdicción, aducen los recurrentes la infracción del artículo 117.3 en relación con el 48.2 ambos, de la Ley de procedimiento Administrativo y de la Jurisprudencia que los desarrolla y cita, en atención a que los recursos de alzada y reposición interpuestos contra el acuerdo denegatorio de la oficina de farmacia no se les dio el oportuno traslado a pesar de que estaban personados en el expediente, y procede rechazar tal motivo de casación, púe la Sentencia recurrida, reconoce, como era obligado, que ciertamente se produjo el defecto de no dar el oportuno traslado a los terceros interesados, como dispone y precisa el artículo 117.3 de la Ley de Procedimiento administrativo, pero no obstante ello y al tiempo, también disponer que no procede declarar la nulidad de actuaciones que se solicita al amparo del artículo 48 de la Ley de Procedimiento administrativo, tanto porque estima, en su fundamento de derecho segundo, que no se ha producido indefensión a la parte a quien se le privó del trámite en el recurso de alzada y de reposición, por las circunstancias que expresa, como porque la postura adoptada, en el proceso por la Administración, permite deducir, que los argumentos que la parte hubiera expuestos en los recursos de alzada y reposición, no hubieran alterado la decisión de Administración, y por todo ello, estima la Sala el principio de economía procesal, y esa solución que adopta la Sala de Instancia, con apoyo además de las Sentencias del Tribunal Supremo, para el supuesto de autos, en razón a que la permite el artículo 48 citado y la abonan los principios de seguridad jurídica, economía procesal y hasta el propio interés público.

Debiendo en fin recordarse que esta Sala en Sentencias de 18 de julio de 1989, 12 de marzo de 1998, 6 y 25 de mayo de 1998, en supuestos incluso de omisión del trámite de audiencia, valorando las circunstancias de cada caso, ha declarado que tal

omisión no siempre genera indefensión, y estima que lo trascendente es la indefensión material, que en el caso de autos, según lo más atrás expuesto no se ha producido."

\*Visto asimismo informe del Director General de Arquitectura-Urbanismo de fecha 04-09-2001, en el que se da cuenta:

"En relación con el recurso de reposición interpuesto por D. Antonio Márquez Martínez, en nombre y representación de D<sup>a</sup>. Adoración Martínez Guardia inquilina del inmueble sito en calle Pradilla nº 1 y, concretamente a la expresada solicitud de suspensión del acto administrativo por el que se ordena la ejecución de obras de reparación del citado inmueble, esta Dirección General, examinado todo el expediente con las actuaciones llevadas a cabo hasta el día de la fecha, hace las siguientes consideraciones:

PRIMERA.- Con solo examinar a través de los documentos el dilatado transcurrir del expediente, sólo puede deducirse una línea de actuación unilateral que, caso de continuar, estaría inevitablemente abocada por el incremento paulatino de los daños del inmueble a una situación insostenible de inseguridad para personas y bienes, no solamente con respecto a los moradores, sino también frente a terceros en su entorno próximo con evidente perjuicio del interés público."

SEGUNDO.- La suspensión del acto con la consiguiente demora temporal solamente conduciría, en base a lo anteriormente expuesto, a una situación constructiva irreversible del edificio, ya que aquellos elementos hoy dañados pero reparables, continuarían evolucionando su estado - por simple lógica de patología arquitectónica - hasta la pérdida definitiva y, lo que es más grave, a la afectación de otros elementos actualmente no comprometidos en la seguridad por efecto de interacción.

Por todo ello, esta Dirección general considera la posibilidad que se produzca una causa de imposible o difícil reparación que emanaría, no de la ejecución del acto ordenado, sino de la suspensión del mismo cuya petición entiende, a su leal saber y entender, no debe ser aceptada."

En consecuencia, atendiendo a las circunstancias que inciden en el expediente y de conformidad con los informes referidos, VENGO EN DISPONER: